

SOBRE IDEOLOGÍA

Es sabido que las instituciones sociales desarrollan, al margen de su función principal o manifiesta, otras de carácter subsidiario que a menudo no son explícitamente reconocidas. Son muchos quienes en referencia al asilo, por ejemplo, precisan, que tan importante como su papel de refugio y guarda de indigentes, es la función moralizadora que ejerce fuera de sus paredes advirtiendo del destino que les espera a las personas poco previsoras.

En las páginas precedentes se señalaban posibles alternativas a las interpretaciones habituales o a los discursos oficiales que suelen hacerse en torno a algunas de las modernas acciones en el campo de los servicios sociales.

Queremos extendernos un poco más en esa tarea interpretativa que, en cierta medida, se podría definir como el análisis de la intencionalidad secreta o inconsciente de ciertas formulaciones —o como la búsqueda de la cara oculta de la luna si se quiere— tratando de descubrir hasta qué punto, esas acciones o formas de hacer, corresponden a concepciones políticas determinadas.

Este propósito de buscarle tres pies al gato —como pensará más de uno/a— resulta especialmente difícil en un tiempo en el que precisamente todos los gatos tienden a ser pardos.

¿Son todos /os gatos pardos?

Existe el generalizado sentimiento de que, incluso en la teoría, y desde luego en la práctica, no se advierten matices dife-

renciales importantes en las ofertas sociales de las diferentes opciones políticas.

Vamos a tratar de analizar esta cuestión en un próximo número de Zerbitzuan monográficamente dedicado al tema. Por el momento, y de cara a centrar un futuro debate, nos permitimos aventurar algunas consideraciones previas.

En primer lugar habría que distinguir entre políticas sociales en la acepción más amplia del término—que abarca el ámbito de la educación, cultura, sanidad, vivienda, etc.— y el estricto campo que compete a los programas de Bienestar Social, dado que, limitando el análisis a este segundo aspecto, cabe la posibilidad de reducir excesivamente la realidad y deducir en consecuencia conclusiones equivocadas.

En efecto, las acciones en cada uno de los dos niveles a los que hacemos referencia, el general y el restrictivo, no tienen porqué estar positivamente relacionados, es más, en pura teoría una actuación política global encaminada a satisfacer las necesidades de la población —en educación, empleo, sanidad, vivienda...— hace menos necesarias las acciones propias de los servicios sociales considerados en el sentido restrictivo, es decir, como instrumentos cuya finalidad básica consiste, precisamente, en corregir los desequilibrios que origina el sistema.

De hecho, muchos políticos que participan de la filosofía liberal, en la medida que tienden a subrayar la responsabilidad individual y niegan el papel protector y promotor que la izquierda atribuye al Estado,

aceptan de buen grado, dependiendo de tendencias, situación económica, nivel de conflictividad social, etc., la referida función paliativa ajustada al estricto marco de los servicios sociales especializados. Pero no es menos cierto que, amplios sectores de la izquierda, radicales o moderados que mantienen actitudes estéticas de cuando sus formulaciones eran más radicales, observan con desconfianza —a la que no es ajena la histórica adscripción político-religiosa del sector— unas acciones cuya función consiste en paliar, y en cierta medida disimular, las dramáticas consecuencias de un sistema esencialmente injusto.

Tal y como formulan la cuestión los trabajadores de los Departamentos de Bienestar Social de los Ayuntamientos, parece evidente, en cualquier caso, que el consenso entre partidos es mayor en este sector que en otros, que en urbanismo o en hacienda por ejemplo, aunque la interpretación del hecho presente variaciones sustanciales. A juicio de muchos, ello se debería a la ignorancia general, que va de derecha a izquierda, acerca del papel de los servicios sociales más allá de su utilidad puramente paliativa, y al escaso margen de libertad que permite a las corporaciones el sistema de financiación y la presión directa de los ciudadanos.

Se tiende a considerar también, dentro de ese contexto, que la comunicación entre las cúpulas y cuadros de los partidos y los políticos locales es poco fluida, de manera que, en ocasiones, estos últimos desconocen incluso, y en consecuencia contradicen, las iniciativas adoptadas en otras instancias. A fin de cuentas, parecen opinar muchos trabajadores sociales, todo depende del talante personal del alcalde o del concejal responsable de área, de su experiencia, sensibilidad y nivel de información, sin que tenga demasiado que ver su adscripción política.

Es indudable, en cualquier caso, que ciertos rasgos de nuestro panorama político, comunes unos a los que caracterizan los sistemas democráticos occidentales, y propios otros de nuestra tardía homologación a dichos sistemas, pueden apoyar la hipótesis de la escasa diferenciación entre las propuestas «sociales» de los partidos.

Esa sensación de que «todos son iguales» puede deberse a que la política actual gira en una órbita utilitario-pragmática en la que se da prioridad a la acción sobre la doctrina y a la experiencia sobre los principios establecidos. En definitiva, la falta de

interés por el color del gato, asegurada su capacidad para cazar ratones —recordando una vez más el proverbio chino— puede hacer que finalmente todos parezcan pardos (1).

Por otra parte los partidos políticos parecen haber descubierto la alta rentabilidad política de las acciones desarrolladas en el sector. Es cierto que la derecha europea y la norteamericana critican virulentamente la filosofía del «estado de bienestar» y que hacen lo que pueden por desmontar estructuras que, en el caso de Gran Bretaña concretamente, han sido modélicas durante mucho tiempo. Son varios los factores que explican que esto no sea exactamente así en nuestro caso. El desarrollo de los servicios sociales es sinónimo aquí de modernización, de homologación con Europa y esas son aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos con independencia de que depositen su voto a la derecha o a la izquierda. Tiene mucho que ver naturalmente con esta cuestión, el hecho de que la cobertura social sea todavía precaria en términos comparativos, o que las tendencias del voto no estén todavía muy consolidadas en términos de derecha-izquierda —en razón de la falta de experiencia política o de la interferencia de otros elementos propios como el nacionalismo— lo que en definitiva contribuye a que las ofertas sean más ambiguas, más abiertas o menos consecuentes si se quiere, en el caso de la derecha particularmente. Contribuye a esta última particularidad el desprestigio histórico, la mala conciencia de la derecha-derecha en este país, de la que explícitamente casi nadie osa declararse partidario y que obliga a sus políticos a introducir elementos de progreso en sus discursos.

Un amplio abanico de posibilidades

El consenso político es prácticamente general en lo que se refiere a los aspectos cualitativos, es decir, en relación a las fórmulas de intervención.

Hoy en día todo el mundo, de forma más o menos matizada naturalmente, está a favor de la integración, principio progre-

(1) Este pragmático proverbio que importó de China el presidente González coincide con la afirmación del también pragmático Willian James (1842-1910), «en principios pragmáticos si la hipótesis de Dios funciona satisfactoriamente, es cierta en el amplio sentido de la palabra», que les pareció excesiva a honrados pragmáticos de la época entre ellos al joven Bertrand Russell.

sista donde los hubiera hace todavía una docena de años, y todo el mundo está también en contra del internamiento, por ejemplo. Podría decirse, pues, que la derecha ha recuperado en gran medida el patrimonio filosófico de la izquierda en este terreno.

A otro nivel, sin embargo, el aludido pragmatismo al que indefectiblemente condenan por lo visto las responsabilidades políticas, hace que se den por buenas soluciones que hace poco, desde determinadas opciones políticas, hubieran parecido inaceptables.

Las mismas personas que en su día citaban a Gentes directamente del francés —«l'absurdité des institutions asilaires de vient de plus en plus evidente en même temps que celles des institutions bourgeoises» etc.— están dispuestas a aceptar hoy la necesidad de «psicogerátricos» con toda naturalidad, en razón de que la realidad se empeña en contradecir incluso los más nobles principios. Por otra parte, la crisis económica y el consiguiente incremento de situaciones de necesidad, situaciones de emergencia social se dice ahora, justifican ciertas fórmulas, o quizá sea más exacto decir liberan del prejuicio de tener que utilizarlas. Es así como la idea de creación de comedores sociales, por ejemplo, servicio que en la memoria colectiva sigue asociado todavía al dragón del hambre de Auxilio Social, va siendo cada vez mejor aceptada por políticos y técnicos independientemente, insistimos, de su adscripción política.

En realidad se está consolidando la idea de que, a priori, ninguna fórmula de actuación es rechazable. La tendencia actual consiste en abrir lo más posible el abanico de la oferta a fin de ajustarla, lo más exactamente posible, a las necesidades del cliente. Puede haber personas que necesitan que les hagan la comida en su casa, otras que se arreglan mejor con un «bono-comida» o con una prestación económica y puede haber también casos que, de manera implícita o explícita, requieren el menú de un comedor social.

En el intento de diversificar la oferta y de buscar alternativas a los servicios convencionales, es habitual la recuperación de fórmulas del pasado, (los propios comedores sociales, asistencia domiciliaria, familias sustituidas...), que al menos desde una perspectiva de izquierda podrían ser de dudoso pedigrí. Se trata en su mayoría de viejas fórmulas asistenciales recicladas, de soluciones comunitarias a las que se les

incorpora un soporte técnico-económico que asegura su viabilidad. Lo interesante es observar que precisamente los sectores más progresistas, son los que con más entusiasmo se afanan en el rescate y reciclaje de esas viejas fórmulas asistenciales, sin que al parecer les produzca el menor complejo la posible coincidencia táctica con sectores reaccionarios. Quizá sucede aquí, como en el seno de otros movimientos de recuperación que denuncian las consecuencias del proceso de industrialización y de urbanización, que se tiende a idealizar el pasado, el supuesto equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el sistema de relaciones sociales de un mundo rural cada vez más lejano y, en consecuencia, también más añorado.

Sea como sea, por añoranza, por interés, por despiste, o porque las cosas son así no pueden ser de otra manera, lo cierto es que las propuestas políticas, son, o se perciben, como poco diferenciadas.

Algunas personas lo ven como un hecho positivo, como un signo de sensatez general (de pragmatismo), de estabilidad, de triunfo del sentido común. Me atrevo a opinar, sin embargo, que la actitud crítica es más generalizada. A la gente le gusta, nos gusta, que los modelos mantengan su coherencia, exigimos, con independencia de que vayamos o no a misa, que el cura, cumpla como cura, que el político de derechas sea y parezca de derechas y que el de izquierdas sea de izquierdas en el fondo, y quizá sobre todo en la forma.

En realidad tendemos a aplicar el modelo deontológico como principio ético a la hora de enjuiciar las conductas de los políticos, lo que equivale a decir que valoramos sus actos como buenos o malos independientemente de sus resultados, siendo así que ellos tienden a moverse, según Weber, y en esto al menos, habría que darle la razón, guiados por una «moral de responsabilidad» que les hace valorar los resultados prácticos más que la virtud intrínseca de sus acciones.

Es cierto que la incompetencia crítica hace necesarias las etiquetas. Necesitamos saber de qué color es el concejal que ha hecho determinada propuesta para saber si es buena o mala, si es aceptable o hay que rechazarla. Sería mejor evidentemente, saber juzgar y decidir en función de los actos, analizándolos de la manera más objetiva posible. Pero también es cierto que la trayectoria de una medida, es decir, la consideración de por quién y en qué circunstancia histórica ha sido utilizada pue-

de ser útil, como un dato más entre otros, a la hora de orientar nuestras actuaciones en una u otra dirección.

Ayudas: ¿en especie o en dinero?

Parece ser que hasta el comienzo de la segunda guerra mundial las organizaciones de caridad occidentales, integradas mayoritariamente por sectores bien pensantes de clase alta, se oponían a las medidas legales establecidas para ayudar a los pobres. Históricamente la pobreza ha sido conceptualizada como mera consecuencia de la incapacidad personal del afectado, e incluso como justo castigo a faltas morales personales o familiares. Es lógico, en consecuencia, que las ayudas se limitasen a lo mínimamente imprescindible para, en palabras de Luis Vives espíritu progresista de su época, «evitar el peligro de corrupción moral y de alteración de la paz pública». Por haber, habría incluso supuestas razones teológicas que impedían combatir la pobreza y contra las que el mismo Vives tuvo que argumentar enardecidamente (2).

Pero además cuando las instituciones de caridad aceptan en última instancia socorrer a los pobres, tienden a hacerlo siempre en especie, es decir, en frutos o en géneros y no en dinero. Esa actitud encierra en realidad un doble enjuiciamiento que es moral: a los pobres no se les puede dar dinero porque —de ahí nace precisamente su pobreza— no saben administrarlo; si se les da, tienden a dilapidarlo en vicios, porque es su catadura moral lo que les hace pobres. Además, hay que tener en cuenta como argumento adicional, que las entregas en especie, se ven, lucen más que las entregas en dinero y lo que es más importante permiten un eficaz control de la población que se «somete» a ayuda «encerándola» en los espacios definidos por las instituciones asistenciales apropiadas.

(2) Otros hay que quieren parecer teólogos, y por lo mismo nos citan algo del Evangelio, no pareciéndoles importante a qué fin o propósito se dijo, es a saber: que Cristo, Señor y Dios nuestro, profetizó: «Siempre tendréis pobres con vosotros». Pero ¿qué se saca de aquí? ¿No prejo también que había de haber escándalos, y San Pablo que habían de levantarse herejías? No socorramos, pues, a los pobres, ni evitemos los escándalos, ni resistamos a las herejías, para que no parezca que Cristo y San Pablo mintieron. Y Vives continúa «¡Oh Dios! digamos mejores cosas: no pronosticó Cristo que había de haber siempre pobres en nosotros, porque deseara esto... sino porque, conociendo nuestra debilidad y poco poder... y nuestra malicia... por eso nos anuncia que hemos de tener siempre pobres; lo mismo es de los escándalos». (Luis Vives. Del socorro de los pobres).

Brel lo explica a su manera en una hermosa canción «la dame patronnesse» —la dama de la caridad sería la traducción— en la que nos cuenta cómo la dama en cuestión tricota jerséis en color caca de pato —cada de oca más exactamente— para reconocer a sus pobres en misa, y es así como descubre que una de ellas se relaciona con un comunista.

Roland Barthes (Incidentes) ve sentado en su terraza cómo dos viejas americanas se apoderan por la brava de un viejo grandullón y ciego y le obligan a cruzar la calzada. «Pero lo que este Edipo hubiera preferido», dice, «es dinero: dinero, dinero, no solidaridad».

Aunque Barthes revolucionó la crítica literaria posiblemente sabía muy poco de servicios sociales. Sin embargo el aludido comentario ilustra la tendencia de cierta progresía a preferir la asepsia de la ayuda en dinero a la promiscuidad de otro tipo de intervenciones.

Podría decirse que facilitar ayudas en dinero supone reconocer la libertad individual de la persona, desligar la pobreza de la incompetencia personal, desterrar los juicios morales a los que anteriormente hemos hecho referencia.

Es cierto que algunas veces se impone la ayuda material en especie. Al margen de las situaciones que requieren un tratamiento difícil de organizar y sostener en términos racionales sobre una base individual —sería el caso de la atención a los deficientes profundos por ejemplo— hay que tener en cuenta otras en las que no existen garantías de que el dinero sirva para los fines propuestos. Es por esta razón que en Francia se distribuyen periódicamente «colis», paquetes de alimentos cuidadosamente seleccionados, entre los viejos. Aunque muchos de ellos no los necesitan en absoluto, se asegura que otros acceden al consumo de determinados productos de calidad necesarios para su bienestar físico, ya que dadas sus especiales características psicológicas —su desmedida austeridad y espíritu ahorrativo entre otros factores— difícilmente se los permitirían aun en el caso de encontrarse en una buena situación económica.

Quizá es más habitual, sin embargo, la situación opuesta, es decir, la de aquellos casos que siendo fundamentalmente económico el origen del problema, se «solucionan» mediante prestaciones no económicas, a un coste muy superior a veces, al que necesitarían, el propio interesado y su

entorno inmediato, de recibir directamente una ayuda monetaria.

Son muchos y muy complejos los factores que hacen que las cosas sean así. Cuestiones de rentabilidad política —las primeras piedras, las cintas y tijeras inaugurales— intereses profesionales, las instituciones, cuerpos vivos, que como tales tienen un tozudo instinto de supervivencia, pero es sin duda fundamental el papel que juegan los factores ideológicos entre los que cabe incluir la tendencia a prejuzgar la catadura moral de las personas con necesidades económicas, cuestión ésta a la que hemos hecho y volveremos a hacer referencia.

Un análisis detallado de los mecanismos de prestación de ayudas en general y de ayudas económicas en particular revelaría cosas interesantes en este sentido.

Ya de entrada llama la atención el importante nivel de fiscalización existente a la hora de conceder prestaciones, rigor que contrasta con la relativa laxitud en el control tributario de los colectivos de más elevados ingresos. Se nos dirá que todo rigor es poco a la hora de controlar el gasto público, pero insistimos en que es cuestión de proporciones y de nivel de eficacia relativa. Contrasta, en efecto, la cantidad y calidad de los controles que debe superar un jubilado para hacerse perdonar una tasa de recogida de basuras, con la relativa facilidad con que un dentista puede burlar el control de Hacienda, siendo como es obvia, la diferente rentabilidad económica que cabe esperar de uno y otro esfuerzo controlador.

Es posible que el mayor grado de «vo-cai6n. social» de los políticos y profesionales implicados en el sector de los servicios sociales, en relación a la de sus colegas económicos, explique en parte estos hechos. También debe contribuir a ello el que la funci6n p6blica de *dar* se sit6e generalmente en niveles administrativos m6s cercanos al ciudadano, que puede as6 controlar y exigir control, que la m6s comprometida funci6n de cobrar. Pero probablemente interviene tambi6n la mayor capacidad de defensa del dentista frente a la pr6ctica indefensi6n del solicitante de ayudas de emergencia y c6mo no, el car6cter discrecional de muchas prestaciones y la posici6n de inferioridad en la que de hecho se sitúa quien solicita «ayudas» aunque tenga perfecto derecho a recibir-las.

Hemos heredado la preocupaci6n de los viejos te6ricos y legisladores por evitar

el fraude, aquella obsesi6n que les hiciera escribir exhaustivos manuales tratando de distinguir entre la pobreza fingida y verdadera (3).

La lucha contra el fraude: los pobres fingidos

A todo el mundo le tranquiliza que, cuando un mendigo llama a su puerta, sea pan o ropa vieja lo que pida y no dinero, ya que as6 cabe la certeza de que se socorre a un pobre verdadero y no a uno de esos «mendicantes validi» de los que habla San Buenaventura, «gente que sin oficio, arte que ejecutar, servir, ni trabajar, andan ociosos, vagando por todas partes...»

Trat6ndose de pobres y necesitados la presunci6n de inocencia no funciona. Ya se dol6a de esto Luis Vives hace quinientos a6os cuando dec6a, «esto descubierto en algunos» —se refiere al fraude de los pobres fingidos— «a todos hace sospechosos».

En un estado de derecho se asume —con m6s convicci6n por unos que por otros— la posibilidad y el riesgo de que peligrosos asesinos anden sueltos, a cambio de evitar la posibilidad de que un inocente sea injustamente castigado. En esto de los pobres sucede lo contrario. El temor a la posibilidad de que un falso pobre se haga con una ayuda a la que no es acreedor, obliga, generalmente, a extremar los tr6mites burocr6ticos, encareciendo y dificultando los tr6mites administrativos y por encima de todo, tiene como desgraciada consecuencia el perjuicio moral y material que causa a muchos necesitados.

Debe ser el influjo de la abundante literatura picaresca espa6ola lo que hace que estemos tan alertados ante el timo. Por otra parte, se dir6a que nada nos molesta tanto como ser enga6ados por quien es v6ctima del infortunio. En el caso de la Administraci6n ni tan siquiera le sirve de consuelo saber que el timo de los pobres

(3) Lallemand divide los falsos pobres de la Edad Moderna en cuatro grandes grupos: 1. Soldados licenciados o desertores. 2. Vagabundos o n6madas; adivinadores, gitanos, etc. 3. Simuladores de enfermedades. 4. Los falsos padres que explotan a sus supuestos hijos. Pedro Jos6 Ord6ñez refiri6ndose en concreto al grupo de vagabundos dec6a entre otras cosas que «viven como b6rbaros, pues ni se sabe, ni se ve, que oigan Misa, confiesen ni comulguen (...) A los hijos en naciendo, los estropean y hacen lisiados, ceg6ngoles a veces, y usan de inhumanidades y transformaciones», se supone que con el fin de obtener ayudas, naturalmente.

fingidos debe representar una mínima parte del fraude general que pacientemente padece y soporta, es decir, el chocolate del loro, o que los falsos pobres sólo son falsos dentro de una muy restrictiva definición de la pobreza.

Es curioso observa por otra parte que el liderazgo en la lucha contra el pequeño fraude ha sido asumido, muchas veces, por políticos y profesionales de izquierda obsesionados por aplicar su estricto sentido de la política social en el pequeño y específico área de poder en el que se les permitía hacerlo.

Pero nunca se insistirá suficientemente en el hecho de que no sólo la pobreza fingida se considera como fraude, la pobreza sin más, la auténtica, es difícil de reconocer y aceptar por quien no la sufre. No se cree en ella, se diría que a quien goza incluso de un precario bienestar le es difícil imaginar una situación de desvalimiento total en la que la persona no puede recurrir a nadie ni a nada. Se acepta claro, la existencia de ciertos casos extremos y limitados, pero en cualquier caso se tiende a considerar que el propio individuo afectado no está libre de responsabilidad (4).

No es de buena educación indagar acerca del destino de un préstamo cuando lo pide un amigo, pero mucha gente que así lo entiende no dudaría en hacer recomendaciones morales sobre su uso a la hora de dar limosna a un pobre. Subyace en ese proceder una actitud paternalista propia de un pasado ya superado, pero cuyas reminiscencias son fáciles de hallar todavía hoy en las relaciones que establece la Administración con los demandantes de prestaciones sociales. De hecho incluso cuando éstas son legales o retributivas tienden a concederse demasiadas veces con cierta prepotencia y a recibirse con agradecida humildad, como si en la relación no mediara la obligación de una parte y el derecho de la otra.

Por otra parte, en la medida en que, como ya hemos señalado anteriormente, el fracaso económico y social se siguen atri-

buyendo, al menos inconscientemente, a la incompetencia personal, cuando no a la falta de rectitud moral, existe un claro temor a que las prestaciones sociales, máxime sin son generosas, contribuyan a la desmotivación de una buena parte de la población que supuestamente pretendería vivir a costa de las ayudas públicas.

Es así cómo políticos y administradores, que en teoría no están en absoluto adscritos a los principios ideológicos de una Thatcher por ejemplo, hablan del riesgo de constitución de una nueva clase o casta de rentistas, refiriéndose a quienes sobreviven o pretenden sobrevivir de espaldas al trabajo, especializándose en recabar ayudas de instituciones públicas y privadas.

Esta desconfianza ante las personas que, como resultado de la crisis económica se ven marginadas del proceso productivo, se parece mucho a la actitud que pone en duda la laboriosidad de los habitantes de países subdesarrollados y, que valorando más los factores individuales que los estructurales tiende a explicar la pobreza del tercer mundo por la ociosidad de sus habitantes (5).

Tendríamos pues, por un lado, la tendencia a menospreciar al necesitado, a responsabilizarle de su suerte, o de su falta de suerte más bien, y por otra parte tendríamos también la natural inclinación del administrador a funcionar como si el dinero que administra fuera suyo y las prestaciones sociales que concede, fruto de su magnanimidad.

Una forma de ver las cosas que sigue más ligada de lo que quisiéramos a un pasado en el que, como reza el emblema de los Mendoza castellanos, se consideraba que «el dar es señorío, y el recibir es servidumbre». O sea que bien podría ser nuestra pobre tradición democrática el factor que explicase algunas coincidencias políticas en el tratamiento de los problemas sociales.

Saizarbitoria

(4) El Social Service Review de la Universidad de Chicago de diciembre del pasado año —volumen 61, número 4— publica un interesante trabajo sobre las actitudes de los trabajadores sociales ante la pobreza. En él se advierte que en veinte años ha aumentado enormemente la proporción de trabajadores que opinan que las causas de la pobreza son socio-estructurales pero los hay todavía que las atribuyen a factores individuales, un 10 por ciento en 1984. A saber qué resultados se obtendrán recabando la opinión de profesionales con menos conocimiento del problema.

(5) Negándose a ver que la laboriosidad de esta gente crece cuando emigran a países desarrollados y se les abren perspectivas de vida de las que carecían en sus tierras de origen. Es corriente la interpretación moral de comportamientos que obedecen a rigurosas leyes económicas como la de la propensión marginal al consumo y al ahorro, por ejemplo, que viene a explicar cómo los pobres tienen más tendencia a gastarse la última peseta que ganan en vino, mientras que los ricos tienden a invertirla, a guardarla o a evadirla según estén los tiempos.